

Santiago, uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, en causa RUC 2.200.642.924-K y RIT 403-2023, por sentencia de quince de marzo de dos mil veinticuatro, condenó a **DANIEL ARMANDO LAGOS OPAZO**, a la pena de **quinientos cuarenta y un (541) días de reclusión menor en su grado medio**, como **autor** del **delito consumado de desacato**, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, ilícito perpetrado en la misma ciudad asiento del tribunal, el 20 de septiembre de 2022.

Se le impuso, además, las penas accesorias legales correspondientes y se sustituyó la pena privativa de libertad por la remisión condicional por el mismo tiempo de la impuesta.

La misma determinación absolvió al acusado de la imputación que lo suponía autor del delito de desacato, violación de morada y daños supuestamente perpetrado el día 3 de julio de 2022.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el once de junio del año en curso, según da cuenta la respectiva acta agregada a estos autos.

Considerando:

1º) Que el recurso de nulidad se sustenta de forma principal, en la causal de invalidación prevista en el **artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal**, en relación con el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, por infracción a las garantías del debido proceso en la presentación de la prueba de cargo, desde que la declaración de la víctima se introdujo al juicio de conformidad a lo previsto en el artículo 331 letra f) del Código Procesal Penal, sin que concurrieran los presupuestos legales para ello.

En primer lugar, se infringió lo previsto en el artículo 11 del Código Procesal Penal, desde que a la fecha de los hechos objeto del juicio, acaecidos el 20 de



septiembre de 2022, no se encontraba vigente la modificación del artículo 331 letra f) del Código Procesal Penal, precepto que fue modificado con la Ley N°21.523, publicada el 31 de diciembre de 2022, pese a lo cual se incorporó en el juicio prueba directamente incriminatoria en perjuicio del justiciable, como es la declaración de la víctima, de conformidad a la aludida normativa.

En segundo término, sostiene que el ejercicio de la prerrogativa prevista en el artículo 331 f) antes aludido, es de excepción y exige informes psicológicos y pauta de evaluación de riesgo en que se encuentra la víctima actualmente y que, pese a ello, el Ministerio Público adjuntó un informe elaborado por un funcionario de la Unidad Regional de Víctimas y Testigos, trabajador social, y no un informe psicológico propiamente tal como asimismo una pauta de riesgo a la época de los hechos y, por tanto, no actualizada. Agrega que el estándar que debe exigir la judicatura para hacer aplicable la prerrogativa aludida por el persecutor debe ponderar correctamente la protección de la víctima y el derecho a defensa del imputado.

Solicita se anule el juicio y la sentencia, se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral, ante el tribunal no inhabilitado que corresponda.

2°) Que, en forma subsidiaria, se hace valer la causal prevista en el **artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal**, por cuanto el desacato por el cual se emitió decisión de condena incide en el incumplimiento de una medida cautelar decretada en una causa que terminó con sentencia absolutoria, por tanto, se trata de un hecho atípico, por lo que, haciendo una correcta aplicación del derecho, debió librarse un veredicto absolutorio.

Sostiene que esto fue advertido por la Juez disidente, quien refirió: *“la interpretación restrictiva de las palabras empleadas por las disposiciones de las Leyes 20.066 y 19.968, glosadas en el considerando sexto de este fallo, apoyada en los métodos comparativo, sistemático y teleológico, recibe el ulterior respaldo de la evidencia, esta vez gramatical y lógica, de que mal se puede quebrantar lo*



ordenado cumplir por un juez, si la resolución misma no está cumplida, como manda el artículo 240, inciso primero, del tantas veces citado Código de procedimiento civil, requisito que no se da cabalmente en las providencias que ordenan medidas cautelares, cuyo cumplimiento como autos es transitorio, no definitivo.”

Solicita se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo, que absuelva a su representado.

3°) Que, para la debida comprensión de la controversia, útil resulta recordar que la sentencia impugnada, en su motivo octavo, tuvo por acreditado los siguientes hechos:

“Hecho 2: *El 20 de septiembre de 2022, alrededor de las 8:40 horas, Daniel Lagos Opazo llegó hasta el domicilio de su ex conviviente Allyson Jaque Montoya, ubicado en calle Blanca Vergara N° 1042 en Viña del Mar, y desde el exterior le solicitó a la víctima que lo dejara pasar, petición que fue negada por ésta, llamando ésta a carabineros, los cuales sorprendieron a Daniel Lagos Opazo sentado frente a la puerta del muro perimetral del domicilio, incumpliendo con ello la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en causa RIT N° 5269-2022 RUC 2200642924-K, que con fecha 29 de agosto de 2022, decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a Allyson Jaque Montoya, la cual le fue notificada personalmente en audiencia ese mismo día, y que se encontraba vigente a la fecha de los hechos”.*

Este hecho fue calificado por el tribunal como constitutivo del delito de desacato, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, en grado de desarrollo consumado, en el que al acusado le correspondió participación de autor, en los términos previstos en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

4°) Que, a fin de dirimir lo planteado en el arbitrio respecto de las causales de nulidad previstas en el artículo 373 letras a) y b) del Código adjetivo, esta Corte razonará sobre la base de los hechos establecidos por los jueces de la instancia



en su fallo y ello es así pues las referidas causales de nulidad están dirigidas a comprobar la infracción sustancial de garantías fundamentales o la errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia y, por tanto, no resultan idóneas para impugnar el proceso valorativo de la prueba efectuado por la judicatura del fondo e instar a su revisión, pues para ello se debe esgrimir la causal de nulidad apta para ese propósito, lo que no ha sido controvertido en la especie.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las causales fundantes del recurso esgrimida de manera principal y subsidiaria, deducido con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.

5°) Que, al tiempo de adentrarse en el planteamiento de la causal de nulidad propuesta por la defensa de manera principal, ha de tenerse en consideración que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, que ordena que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y al efecto el artículo 19 N° 3°, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las condiciones de un procedimiento racional y justo. Y sobre los presupuestos básicos que tal salvaguardia supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen, a lo menos, un conjunto de resguardos que la Carta Fundamental, los Tratados Internacionales ratificados por Chile en vigor y las leyes, les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura, a vía de ejemplo, que todos puedan hacer valer sus pretensiones en tribunales imparciales, que sean escuchados, que puedan impugnar las resoluciones con las que no estén conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley con fidelidad a la Constitución y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS N° 6902-2012, de 6 de noviembre de 2012, N° 2747-13, de 24 de junio de 2013, N° 6250-2014, de 7 de mayo de 2014, N° 4269-19, de 25 de marzo de 2019, y N° 92059-20, de 8 de septiembre de 2020, entre otras).



6°) Que esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (SCS 2866-2013, 21.408-2014, 4269-2019, 59.504-2020, 3228-2022, 150-2023, entre otras).

7°) Que al efecto, resulta necesario tener en consideración que, conforme aparece del tenor del recurso y de la sentencia atacada, se impugna la incorporación a juicio de un antecedente que, sumado a otros elementos de cargo, permitieron el asentamiento del hecho que fundamenta la condena, situación que desde ya y en un primer examen priva de sustento a la impugnación, por cuanto el referido elemento no fue el único que contribuyó a la formación de convicción en un sentido determinado por parte del tribunal. Por ello, aun cuando la aceptación de dicha prueba lo haya sido fuera de los casos establecidos en la ley, su ingreso a los elementos que el tribunal debió valorar para la decisión de lo debatido careció de la capacidad específica que le atribuye la defensa, según se lee del motivo noveno de la sentencia atacada, lo que impide que tal eventual yerro tenga la trascendencia y entidad que es indispensable para admitir la configuración de la causal de nulidad alegada.

En efecto, la judicatura estimó suficientemente comprobado el hecho ilícito por el que el acusado resultó condenado con los asertos de dos funcionarios policiales que declararon en juicio, particularmente con el testimonio del cabo primero Josephi Jean Carlo Ghiselini Belmar -que concurrió a auxiliar a la víctima



el día de los hechos y manifestó que encontró al encartado a las afueras del domicilio de la denunciante- además de la prueba documental incorporada, consistente en Acta de audiencia de control de detención de la causa RIT 5269-2022, de 29 de agosto de 2022, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que informa la prohibición que le asistía al acusado de acercarse a su ex conviviente con expresa mención a los lugares que se indican, entre ellos el domicilio donde concurren los efectivos policiales, el que fue reconocido por el funcionario de Carabineros Ghiselini Belmar, en la fotografías que les fueron exhibidas en juicio.

Por consiguiente, la incorporación de la declaración de la víctima al juicio, en virtud de lo preceptuado en el artículo 331 literal f) del Código Procesal Penal, carece de la sustancialidad que la hipótesis de nulidad en estudio exige para producir los efectos que le son propios, esto es, que sea insalvable ante el derecho al debido proceso, por lo que el recurso no podrá ser aceptado por el motivo expresado.

8°) Que, la causal subsidiaria del recurso en estudio acusa una errónea aplicación del derecho desde que se trata de un hecho atípico, por cuanto se ha incumplido medida cautelar impuesta en un proceso en que, finalmente, se dictó sentencia absolutoria.

Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley N° 20.066, prevé: *“en caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) del artículo 9°, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días”*.

Por su parte, el señalado inciso segundo del referido artículo 240, dispone: *“el que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo”*.

9°) Que, como es sabido, el delito de desacato, previsto y sancionado en el citado artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, forma parte de las normas



contenidas en su Libro I, específicamente en el “Título XIX. De la ejecución de las resoluciones judiciales”, y es concebido por la doctrina como un atentado contra la correcta administración de justicia cometido por particulares. En efecto, ha sido señalado con razón que lo que esta figura castiga es el quebrantamiento de un mandato judicial que obliga a abstenerse, esto es, actuar positivo en contra de lo resuelto o ejecutado, alterando por vías de hecho una situación existente. Y *“el bien jurídico protegido por esta disposición puede identificarse no sólo con la pretensión de asegurar la fiabilidad de las resoluciones judiciales, sino también, y sobre todo, con su observancia”* (Matus, Jean Pierre, La discusión sobre el aspecto objetivo del delito de desacato en las resoluciones judiciales, Revista de Ciencias Penales, 6a época, Vol. XLIII, N°3, 2016, p. 41).

Así quebrantar lo ordenado cumplir significa traspasar o violar mediante un hecho positivo la orden de abstenerse de alterar una situación reconocida por una resolución judicial o creada por su cumplimiento. En el caso de autos, la orden de abstención consistía en la prohibición de acercamiento a la posible víctima, situación que fue creada por la obligación de abandono del hogar común, decretada por el tribunal que conoció de la denuncia por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

10°) Que igualmente conviene recordar que conforme lo declaran expresamente los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 20.066, el objeto de dicho cuerpo normativo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma, e imponen como obligación del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia, debiendo, además, asumir el deber de adoptar políticas orientadas a prevenir ese tipo de violencia, en especial contra la mujer y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas, disponiendo que, entre otras, adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -también conocida como Convención Belém do Pará-, la Convención sobre los



Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, estableciendo dicho texto que, a fin de prevenir situaciones de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, el juez, con el solo mérito de la denuncia, debe adoptar las medidas de protección o cautelares que corresponda, correspondiendo que en caso de incumplimiento de las señaladas medidas cautelares o accesorias decretadas ponga en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. (SCS Rol 8467-2009 de 26 de enero de 2010).

11°) Que, en consecuencia, en atención a los bienes jurídicos tutelados por la Ley N° 20.066, nuestro ordenamiento jurídico ha reforzado penalmente el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas en el marco de un procedimiento seguido por actos que se han catalogado como constitutivos de violencia intrafamiliar, mediante la remisión al delito contemplado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objetivo de esta última norma proteger el imperio de las resoluciones judiciales, sancionando a quien a sabiendas quebranta lo que se le ha ordenado cumplir por un tribunal de justicia.

12°) Que de la lectura de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Violencia Intrafamiliar y 240 del Código de Procedimiento Civil se observa que en parte alguna se exige para configurar un delito de desacato que el quebrantamiento de las medidas cautelares deba tener asociado un riesgo efectivo para la salud, la integridad o la vida de la persona protegida, importando la interpretación de la defensa la exigencia de elementos que no han sido contemplados por el legislador y que tampoco se avienen con el objetivo previsto al establecer la norma, entendiendo que éste no es otro que eliminar cualquier posibilidad de riesgo de afectación a la víctima de un acto que ha sido catalogado indiciariamente como constitutivo de violencia intrafamiliar, a través de la imposición de medidas cautelares al hechor que, necesariamente, deben ser cumplidas por éste, asociando la eventual desobediencia del mandato del tribunal



con el delito de desacato, sin que sea óbice de ello, que posteriormente se dicte una sentencia absolutoria, sino la vigencia de la medida cautelar y el cumplimiento a sabiendas de la misma por el imputado, todo lo cual fue acreditado en el juicio.

13°) Que, en consecuencia, los jueces del grado no han incurrido en una errónea aplicación del derecho al sancionar los quebrantamientos del acusado pues han verificado que éste con cabal conocimiento de las medidas cautelares que le habían sido impuestas, en el marco de una causa seguida por violencia intrafamiliar, desobedeció la orden del tribunal, concurriendo al domicilio que debía abstenerse de visitar, aproximándose además a la persona de quien debía mantenerse alejado, incumpliendo así, deliberadamente y de manera contumaz, las prohibiciones que le fueron impuestas, configurándose el injusto del inciso 2° del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, al lesionar el bien jurídico que la norma protege que, como se dijo, no es otro que el imperio de las resoluciones judiciales y la recta administración de justicia, motivo por el cual el motivo de nulidad invocado en el recurso de manera subsidiaria también será desestimado.

14°) Que, por consiguiente, los Jueces del Tribunal Oral al dictar la sentencia impugnada han cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invoca el recurrente, por lo que el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de Daniel Armando Lagos Opazo, en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil veinticuatro y del juicio oral que le antecedió, en el proceso RUC 2.200.642.924-K, RIT 403-2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Urquieta.

Rol N° 11.883-2024.



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G. y Carlos Urquieta S. Santiago, 01 de julio de 2025.



En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

